



REPÚBLICA DE COLOMBIA



RESOLUCIÓN No 365
11 de febrero del 2022



2022RES-210.300.24-0365

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la lista de elegibles a la aspirante Shirley Johana Álvarez Anaya, Proceso de Selección No. 1343 de 2019 – Convocatoria Territorial 2019-II”

EL DESPACHO DE CONOCIMIENTO

En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política y, en especial, las consagradas en el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en el artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, en el artículo 27 del Acuerdo No. CNSC-20191000008636 de 2019 y en el numeral 11 del artículo 14 del Acuerdo No. CNSC-2073 de 2021, y

CONSIDERANDO:

1. Antecedentes

De conformidad con el artículo 11, literales c) e i), de la Ley 909 de 2004, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, entre otras funciones, *“Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento”* (...) y *“Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para tal fin”*.

En observancia de la citada norma, la CNSC expidió el Acuerdo No. 20191000008636 de 2019¹, *“Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Gobernación del Atlántico-Convocatoria No. 1343 de 2019- Territorial 2019-I”*².

En aplicación del artículo 30 de la Ley 909 de 2004, la CNSC suscribió con la Universidad Sergio Arboleda, el Contrato No. 617 de 2019, con el objeto de *“Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa de algunas entidades de los departamentos de atlántico, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Risaralda – ofertadas en la convocatoria territorial 2019 - II, desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la etapa de valoración de antecedentes”*.

Concluidas las Etapas de Inscripciones, de Verificación de Requisitos Mínimos y de aplicación de Pruebas, con sus respectivas reclamaciones, de este proceso de selección, se publicaron los resultados definitivos de cada una de las pruebas aplicadas a quienes concursaron por el empleo al cual la aspirante SHIRLEY JOHANA ALVAREZ ANAYA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1001778224, fue admitida, procediendo la CNSC a conformar y adoptar, en cumplimiento del artículo 24 del precitado Acuerdo del Proceso de Selección, en concordancia con lo previsto en el numeral 4º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, vigente para la fecha de expedición de dicho Acuerdo, la correspondiente Lista de Elegibles mediante la Resolución No. 2021RES-400.300.24-8771 del 11 de noviembre de 2021, en los siguientes términos:

ARTÍCULO PRIMERO. Conformar y adoptar la Lista de Elegibles para proveer uno (1) vacante(s) del empleo denominado TECNICO ADMINISTRATIVO, Código 367, Grado 12, identificado con el Código OPEC No. 75420, del Sistema General de Carrera Administrativa dela planta de personal de la GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO, ofertado en el Proceso de Selección 1343 de 2019 - Territorial 2019– II, así:

POSICIÓN	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	PUNTAJE
1	CC	1082914852	LINA MARCELA	BELTRAN NUÑEZ	66.11
2	CC	1042443554	JAIME LUIS	ZAPATAARGEL	66.10

¹ Aprobado en Sala Plena de Comisionados el 13 de junio de 2019.

² Modificado por el Acuerdo No. CNSC - 20191000008966 de 2019.

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la lista de elegibles a la aspirante Shirley Johana Álvarez Anaya, Proceso de Selección No. 1343 de 2019 – Convocatoria Territorial 2019-II”

POSICIÓN	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	PUNTAJE
3	CC	1001778224	SHIRLEY JOHANA	ALVAREZANAYA	66.03
4	CC	32883029	ASTRID OSIRIS	FUENMAYOR SIERRA	64.77
5	CC	1143444727	JAIRO ADOLFO	ROMO CHI	64.05
6	CC	1047338945	SILVANASOFIA	SALCEDO SALCEDO	63.65
7	CC	22740813	ADRIANA MILENA	CANTILLOPEREIRA	61.87
8	CC	1102805404	MAURICIO FERNANDO	CONDE ALVAREZ	61.24
9	CC	1128060243	RONALD ENRIQUE	ALVAREZ CABARCAS	58.64
10	CC	1069483631	KELLYS PATRICIA	CALDERON REINO	55.24

2. Competencia y oportunidad para solicitar la exclusión de la Lista de Elegibles

Publicada la referida Lista de Elegibles el 19 de noviembre de 2021, la Comisión de Personal de la Gobernación del Atlántico (Atlántico), mediante radicado interno No. 447547980 del 26 de noviembre de 2021, presentó solicitud de exclusión de dicha lista de la aspirante SHIRLEY JOHANA ALVAREZ ANAYA, cumpliéndose los requisitos de competencia y oportunidad establecidos en el artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, por el que se reglamentan los procedimientos a surtir ante y por la CNSC, para realizar esta solicitud:

ARTÍCULO 14. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la lista de elegibles, la Comisión de Personal de la entidad u organismo interesado en el proceso de selección o concurso podrá solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lista de elegibles de la persona o personas que figuren en ella, cuando haya comprobado cualquiera de los siguientes hechos:

- 14.1. Fue admitida al concurso sin reunir los requisitos exigidos en la convocatoria.
- 14.2. Aportó documentos falsos o adulterados para su inscripción.
- 14.3. No superó las pruebas del concurso.
- 14.4. Fue suplantada por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el concurso.
- 14.5. Conoció con anticipación las pruebas aplicadas.
- 14.6. Realizó acciones para cometer fraude en el concurso.

Los argumentos expuestos por la Comisión de Personal de la Gobernación del Atlántico (Atlántico) en su solicitud de exclusión, son los siguientes:

“el cargo requiere Título de formación técnica o tecnológica en el núcleo básico del conocimiento en Administración, Economía, Contaduría Pública. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada, los aspirantes no acredita experiencia relacionada con las funciones del cargo por tal motivo se solicita la exclusion por el articulo 14 del Decreto ley 760 de 2005. 14.1 fue admitida al concurso sin reunir los requisitos exigidos por la convocatoria (...) (Sic).

3. Competencia de la CNSC para resolver la solicitud de exclusión de la Lista de Elegibles

El artículo 130 de la Constitución Política establece que la CNSC es la “(...) responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial”, norma que desarrolla el artículo 7 de la Ley 909 de 2004.

Con este fin, el artículo 12, literales a) y h), de la Ley 909 de 2004, le asigna a la CNSC las siguientes funciones de vigilancia de la correcta aplicación de las normas de Carrera Administrativa:

- a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisión podrá en cualquier momento, de oficio o a petición de parte, adelantar acciones de verificación y control de la gestión de los procesos con el fin de observar su adecuación o no al principio de mérito; y, dado el caso, suspender cautelarmente el respectivo proceso, mediante resolución motivada;
(...)
- h) Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta aplicación de los principios de mérito e igualdad en el ingreso y en el desarrollo de la carrera de los empleados públicos, de acuerdo a lo previsto en la presente ley (Subrayado fuera de texto).

Por su parte, el artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, en relación con la exclusión de aspirantes de las Listas de Elegibles conformadas en los procesos de selección, dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 16. La Comisión Nacional del Servicio Civil una vez recibida la solicitud de que trata los artículos anteriores y de encontrarla ajustada a los requisitos señalados en este decreto, iniciará la actuación administrativa correspondiente y comunicará por escrito al interesado para que intervenga en la misma.

Analizadas las pruebas que deben ser aportadas por la Comisión de Personal y el interesado, la Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará la decisión de excluir o no de la lista de elegibles al participante. Esta decisión se comunicará

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la lista de elegibles a la aspirante Shirley Johana Álvarez Anaya, Proceso de Selección No. 1343 de 2019 – Convocatoria Territorial 2019-II”

por escrito a la Comisión de Personal y se notificará al participante y contra ella procede el recurso de reposición, el cual se interpondrá, tramitará y decidirá en los términos del Código Contencioso Administrativo.

De las anteriores normas, se deduce la facultad legal de la CNSC para adelantar la presente actuación administrativa.

En consecuencia, en cumplimiento del precitado artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el Auto No. 2022AUT-210.300.24-0043, “*Por el cual se inicia la actuación administrativa tendiente a decidir la solicitud de exclusión de Lista de Elegibles de la aspirante SHIRLEY JOHANA ALVAREZ ANAYA, OPEC 75420, Convocatoria No. 1343 de 2019–Territorial 2019-II*”.

4. Comunicación del Auto de inicio de la actuación administrativa de exclusión de la Lista de Elegibles

Conforme al artículo 2 del referido Auto, el mismo fue comunicado el 13 de enero de 2022, mediante el aplicativo SIMO de la CNSC, en los términos del artículo 33 de la Ley 909 de 2004, al correo electrónico de la señora SHIRLEY JOHANA ALVAREZANAYA, concediéndole el término de diez (10) días hábiles para que, en ejercicio de su derecho de contradicción, interviniera en la presente actuación administrativa, los cuales transcurrieron entre el 14 y el 27 de enero de 2022.

5. Intervención de la aspirante en la actuación administrativa de exclusión de la Lista de Elegibles

Dentro del término anteriormente indicado, mediante radicado de entrada No. 455051078 del 26 de enero de 2022, la aspirante intervino en la presente actuación administrativa, entre otros, con los siguientes argumentos:

“Interpongo el recurso de reposición en subsidio de apelación rechazando la solicitud de exclusión de la lista de elegible de mi persona Shirley Johana Álvarez Anaya, identificada con la cedula de ciudadanía # 1.001.778.224 de Barranquilla. Me presente de manera voluntaria y haciendo uso de mi derecho a concursar por mérito a un empleo a través de la convocatoria # 1343 de 2019 -territorial 2019-II, aprobando cada etapa del concurso como fueron designadas por el ente a cargo, en primera instancia la verificación de los requisitos mínimos, la cual me permitió avanzar para presentar las pruebas escritas de las cuales obtuve como resultado en competencias funcionales 67.39 y en competencias comportamentales 75, puntajes que según lo establecido por el empleo son aceptados, finalmente en la valoración de los antecedentes nivel técnico obtuve un puntaje 52.98, según los criterios estipulados por el numeral 4 del anexo de las diferentes etapas del proceso de selección de la presente convocatoria.

Difiero con lo expuesto en acto administrativo Auto # 43 en cual mencionan que fui admitida sin reunir los requisitos ya que se requiere título de formación técnico o tecnología básica en conocimientos en administración, economía y contaduría pública, los cuales aporté en el proceso de inscripción, el diploma de Contaduría pública el cual evaluado por la entidad como valido y cumple con lo el requisito mínimo del empleo. Así como también los 18 meses de experiencia relacionada con el cargo, validadas por la entidad designada para su revisión, puntuando la experiencia laboral en 86.37 y las funciones administrativas que contemplan el empleo son de acordes con la aportadas en el la plataforma teniendo en cuenta que esos son los requisitos anunciados al público. (Sic)

(...)

En el artículo 14 del decreto el 760 de 2005, mencionan que tiene 5 días de publicadas las listas para presentar este recurso de exclusión con el radicado interno 447547980 del 26 de noviembre de 2021, el cual no fue aportado en este comunicado y así validar porque en esta instancia del proceso no se cumple con los requisitos previamente revisados y evaluados por la entidad, vulnerando mi derecho constitucional al empleo y el mérito adquirido mediante el concurso de oferta pública de empleo del cual participe y se debe respetar la lista de elegible.

Solicito que se revoque la solicitud de exclusión de la lista elegible del auto 0043 de 2022, y se respete el derecho adquirido por cumplir con las etapas y requisitos, tomando firmeza del reconocimiento de mi inclusión en ella.

6. Fundamentos jurídicos para la decisión

En primer lugar, se debe resaltar que el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, establece la *Convocatoria*, como una etapa del proceso de selección para proveer vacantes definitivas de cargos de carrera administrativa, “*(...) es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes*” (subrayado fuera de texto), precepto sobre el que se ha pronunciado favorablemente la Corte Constitucional en diferentes sentencias, entre las cuales se pueden destacar las Sentencias SU-913 de 2009, SU-446 de 2011, T-829 de 2012 y T-180 de 2015. Específicamente, en la Sentencia SU-913 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, dicha corporación manifestó:

(...) En relación con la etapa de convocatoria, la sentencia T-256 de 1995 concluyó que “Al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la lista de elegibles a la aspirante Shirley Johana Álvarez Anaya, Proceso de Selección No. 1343 de 2019 – Convocatoria Territorial 2019-II”

participantes como para aquélla: es decir, que a través de dichas reglas la administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las reglas del concurso (...) incurre en violación de los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el proceder irregular de aquélla” (Subrayado fuera de texto).

En la misma línea jurisprudencial, en la Sentencia SU-446 de 2011, M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, expresó:

Por tanto, si lo que inspira el sistema de carrera es el mérito y la calidad, son de suma importancia las diversas etapas que debe agotar el concurso público. En las diversas fases de éste, se busca observar y garantizar los derechos y los principios fundamentales que lo inspiran, entre otros, los generales del artículo 209 de la Constitución Política y los específicos del artículo 2 de la Ley 909 de 2004 (...). La sentencia C-040 de 1995 (...) reiterada en la SU-913 de 2009 (...), explicó cada una de esas fases, las que por demás fueron recogidas por el legislador en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 (...).

(...)

Dentro de este contexto, la convocatoria es, entonces, “la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes”, y como tal impone las reglas de obligatoria observancia para todos, entendiéndose administración y administrados-concursantes. Por tanto, como en ella se delinearán los parámetros que guiarán el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes (...).

(...)

Es indiscutible, entonces, que las pautas del concurso son inmodificables y, en consecuencia, a las entidades no le es dado variarlas en ninguna fase del proceso, por cuanto se afectarían principios básicos de nuestra organización, como derechos fundamentales de los asociados en general y de los participantes en particular (Subrayados fuera de texto).

En los mismos términos se pronunció en la Sentencia T-829 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub:

Es preciso tener en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 (...), la convocatoria es norma reguladora de todo concurso y a ella quedan obligados tanto la Comisión Nacional del Servicio Civil como la entidad que convoca el concurso y todos los participantes (Subrayado fuera de texto).

Y más recientemente en la Sentencia T-180 de 2015, M.P. Jorge Iván PalacioPalacio:

La convocatoria se convierte en una expresión del principio de legalidad tanto para oferentes como para inscritos, de tal forma que incumplir las directrices allí estipuladas contraviene no solo los derechos de los aspirantes, sino aquel valor superior al cual está sujeto toda actuación pública. Dicho en otros términos, el acto administrativo que la contenga funge como norma del concurso de méritos, por lo cual todos los intervinientes en el proceso deben someterse aquel so pena de trasgredir el orden jurídico imperante.

(...)

El concurso público ha sido el mecanismo establecido por la Carta Política para que en el marco de una actuación imparcial y objetiva (...), haga prevalecer al mérito como el criterio determinante para proveer los distintos cargos en el sector público. Su finalidad es que se evalúen las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, para de esta manera escoger entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo, dejando de lado cualquier aspecto de orden subjetivo (...).

Dicha actuación debe estar investida con todas las ritualidades propias del debido proceso (...), lo que implica que se convoque formalmente mediante acto que contenga tanto de (sic) los requisitos exigidos para todos los cargos ofertados, como de (sic) las reglas específicas de las diversas etapas del concurso (...) a las que se verán sometidos los aspirantes y la propia entidad estatal (...). Sobre el particular, este Tribunal señaló en la Sentencia SU-913 de 2009 que:

- (i) Las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son inmodificables (...).
- (ii) A través de las normas obligatorias del concurso, la administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada.
- (iii) Se quebranta el derecho al debido proceso y se infringe un perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe (...).

(...)

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la lista de elegibles a la aspirante Shirley Johana Álvarez Anaya, Proceso de Selección No. 1343 de 2019 – Convocatoria Territorial 2019-II”

En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha expresado de manera uniforme y reiterada que los concursos – en tanto constituyen actuaciones adelantadas por las autoridades públicas – deberán realizarse con estricta sujeción (i) al derecho al debido proceso; (ii) al derecho a la igualdad y (iii) al principio de la buena fe (...). Dicha obligación se traduce, en términos generales, en el imperativo que tiene la administración de ceñirse de manera precisa a las reglas del concurso ya que aquellas, como bien lo ha sostenido esta Corporación, constituyen “ley para las partes” que intervienen en él (...) (Subrayados fuera de texto).

A su vez, el Consejo de Estado, Sección Primera, en Sentencia del 17 de febrero de 2011, M.P. María Elizabeth García González. Ref. 2010-03113-01, se pronunció así:

El concurso de méritos ha sido considerado el instrumento más idóneo y eficaz, para determinar las aptitudes de los aspirantes a un cargo. Además de los principios que lo inspiran, entre ellos, el mérito, la igualdad en el ingreso, la publicidad y la transparencia, la ejecución de sus reglas debe someterse al estricto cumplimiento del debido proceso y respetar todas y cada una de las garantías que rodean el proceso de selección (Subrayado fuera de texto).

(...) De este modo, frente a la vulneración del debido proceso administrativo, entendido como *“la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley”*.

Sobre la finalidad de los concursos de méritos para proveer cargos de carrera administrativa, la Corte Constitucional en Sentencia C-533 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, señaló:

Como lo ha expresado la jurisprudencia, [s]e debe recordar que la finalidad misma de la carrera administrativa es reclutar un personal óptimo y capacitado para desarrollar la función pública. Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los fines estatales, la carrera permite que quienes sean vinculados a la administración bajo esta modalidad, ejerzan de manera calificada la función pública que se les asigna, ya que dicho sistema está diseñado para que ingresen y permanezcan en él aquellas personas que tengan suficientes calidades morales, académicas, intelectuales y laborales para asumir con eficiencia y honestidad dicho servicio. Existe entonces una estrecha relación entre el cumplimiento de los fines del Estado y la prioridad que el constituyente otorga a la carrera administrativa, que se explica en la naturaleza del sistema y en los principios que lo fundan (Subrayado fuera de texto).

Por otra parte, el numeral 2.1.1. del Anexo del Acuerdo del Proceso de Selección, define los siguientes términos:

2.1.1. Definiciones

Para todos los efectos de este proceso de selección, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

(...)

f) Experiencia: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio (Decreto Ley 785 de 2005, artículo 11).

Para efectos del presente proceso de selección, la experiencia se clasifica en Laboral, Relacionada, Profesional y Profesional Relacionada.

(...)

h) Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer (Decreto Ley 785 de 2005, artículo 11).

Ahora bien, en el numeral 2.1.2. ibídem, se establecieron las condiciones de la documentación para la VRM y la Prueba de Valoración de Antecedentes, señalando que la Experiencia se debía certificar así:

2.1.2.2. Certificación de la Experiencia

Los certificados de experiencia en entidades públicas o privadas, deben indicar de manera expresa y exacta (artículos (...) 2.2.3.4 y 2.2.3.6 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el artículo 12 del Decreto Ley 785 de 2005, artículo 12):

- Nombre o razón social de la entidad que la expide.
- Empleo o empleos desempeñados con fechas de inicio y terminación para cada uno de ellos (día, mes y año), evitando el uso de la expresión “actualmente”.
- Funciones de cada uno de los empleos desempeñados, salvo que la ley las establezca.

En los casos en que la ley establezca las funciones del cargo o se exija solamente Experiencia Laboral o Profesional, no es necesario que las certificaciones las especifiquen.

Las certificaciones deberán ser expedidas por la autoridad competente o quienes hagan sus veces.

Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar la firma, antefirma legible (nombre completo) y número de cédula del empleador contratante, así como su dirección y teléfono.

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la lista de elegibles a la aspirante Shirley Johana Álvarez Anaya, Proceso de Selección No. 1343 de 2019 – Convocatoria Territorial 2019-II”

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8).

La experiencia acreditada mediante Contratos de Prestación de Servicios, deberá ser soportada con la respectiva certificación de la ejecución del contrato o mediante el Acta de Liquidación o Terminación, precisando las actividades desarrolladas y las fechas de inicio y terminación de ejecución del contrato (día, mes y año).

En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo, siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio y de terminación (día, mes y año), el tiempo de dedicación (en horas día laborable, no con términos como “dedicación parcial”) y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento.

Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones (tiempos traslapados), el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.

Para la contabilización de la Experiencia Profesional a partir de la fecha de terminación y aprobación de materias, deberá adjuntarse la certificación expedida por la institución educativa, en que conste la fecha de terminación y la aprobación de la totalidad del pensum académico. En caso de no aportarse, la misma se contará a partir de la obtención del título profesional. Para el caso de los profesionales de la Salud e Ingenieros se tendrá en cuenta lo dispuesto en el acápite de Definiciones del presente Anexo.

Es importante que los aspirantes tengan en cuenta:

- Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas no serán tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación dentro del proceso de selección, ni podrán ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben adjuntar Actas de Posesión ni documentos irrelevantes para demostrar la experiencia. No obstante, las mencionadas certificaciones podrán ser validadas por parte de la CNSC en pro de garantizar la debida observancia del principio de mérito en cualquier etapa del proceso de selección.

(...)

7. Análisis probatorio

Se procede, entonces, a realizar un estudio de los documentos aportados por el aspirante en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, dentro del plazo señalado para cumplir con esta labor en el Proceso de Selección que nos ocupa, lo cual permitirá establecer si procede o no la causal alegada por la Comisión de Personal para excluir a la elegible.

Para tal fin, se tendrán en cuenta los requisitos exigidos para el empleo identificado con el código OPEC No. 75420, al cual se inscribió la aspirante, conforme lo prevé el artículo 11 del Acuerdo del Proceso de Selección. Al verificar la OPEC registrada en SIMO para este empleo por la entidad territorial, se encuentra lo siguiente:

Estudio: Título de formación técnica o tecnológica en el núcleo básico del conocimiento en Administración, Economía, Contaduría Pública.

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada

Alternativa de estudio: Terminación y aprobación de seis (6) semestres de educación superior en el núcleo básico del conocimiento en Administración, Economía, Contaduría Pública.

Alternativa de experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada

Propósito: Revisar, radicar, viabilizar los proyectos de inversión pública presentados al banco de programas y proyectos de la gobernación del atlántico como instrumento de elaboración del presupuesto departamental. homologar proyectos viabilizados con artículos presupuestales para posterior ejecución. apoyar en el sistema general de regalías el proceso de la organización de los ocad (órgano colegiado de administración y decisión) del departamento.

En atención al argumento de exclusión expuesto por la Comisión de Personal de la Gobernación del Atlántico (Atlántico), y a lo planteado por la aspirante en su intervención, se procede a verificar en el SIMO los documentos con los cuales la Universidad Sergio Arboleda, como operador del proceso de selección para la Etapa de Verificación de Requisitos Mínimos, consideró que la aspirante acreditaba el requisito mínimo de Experiencia Relacionada exigido para el empleo a proveer, así:

- Certificado del 21 de febrero de 2019, emitido por la Estación de Servicio COLISEO, donde señala que la aspirante se encuentra (ó) vinculado (a) con esta empresa mediante contrato de trabajo indefinido, en la ciudad de Barranquilla, desde el 26 de septiembre de 2016. El nombre del cargo es de Asistente de Contabilidad y desarrolla las siguientes actividades técnicas contables con una dedicación de 48 horas semanales:
 - Contabilización de gastos bancarios y notas de contabilidad
 - Contabilización de las ventas diarias tanto de líquidos como de gas
 - Contabilización de baucherés y ordenarlos por franquicia de acuerdo a instrucciones
 - Contabilización de reembolsos de caja menor
 - Contabilización de facturas de compra

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la lista de elegibles a la aspirante Shirley Johana Álvarez Anaya, Proceso de Selección No. 1343 de 2019 – Convocatoria Territorial 2019-II”

- Contabilización de cuentas por pagar
- Elaboración de egresos y cheques
- Elaboración de facturas de crédito
- Elaboración de recibos de caja y consignación en bancos
- Apoyo en la elaboración de la nómina y revisión de marcaciones de los empleados de la estación
- Elaboración de plantilla de seguridad social
- Contabilización de los impuestos por pagar
- Contabilización notas de contabilidad y reclasificaciones de cuentas
- Elaboración de órdenes de compra
- Cobro de cartera de clientes de crédito
- Afiliación de empleados a seguridad social
- Atención y entrega de protocolos a empleados nuevos.

Una vez verificada la certificación laboral anteriormente descrita, validada por el operador del proceso de selección, este Despacho encuentra que las actividades realizadas por la aspirante no guardan relación con las funciones del empleo a proveer dado que aquellas están relacionadas con labores contables y las de la OPEC tienen que ver con la viabilización de proyectos de inversión pública, apoyo al Sistema General de Regalías y elaboración de planes de desarrollo.

Así las cosas, este Despacho procederá a valorar las demás certificaciones laborales que fueron aportadas oportunamente por la aspirante en el SIMO para este proceso de selección, con el fin de determinar si cumple con el requisito de Experiencia Relacionada requerido para el empleo a proveer. Veamos:

- Certificado emitido por HERTEC LTDA, donde señala que la aspirante laboró en el cargo de Asistente Administrativo y contable, desde el 1 de diciembre del 2011 hasta el 13 de febrero de 2016, desempeñando las siguientes funciones:
 - Elaboración y liquidación de planilla de seguridad social
 - Elaboración de facturas de clientes.
 - Contabilización de cuentas por pagar
 - Contabilización de impuestos nacionales y distritales
 - Elaboración de egresos
 - Cobro de cartera de clientes créditos
 - Elaboración de recibos de caja
 - Elaboración, liquidación y contabilización de nómina.
 - Elaboración de conciliación Bancaria
 - Registro de gastos bancarios y notas de contabilidad.

Las funciones anteriormente descritas no guardan relación con las funciones del empleo a proveer, dado que, al igual que la anterior, versan sobre actividades contables y las de la OPEC, tal como se mencionó con anterioridad tienen que ver con la viabilización de proyectos de inversión pública, apoyo al Sistema General de Regalías y elaboración de planes de desarrollo.

- Certificado emitido por la Empresa de Tránsito y Transporte Metropolitano de Barranquilla S.A., donde señala que la aspirante *“laboró en esta empresa desempeñando funciones de auxiliar administrativo en la sede norte, desde febrero a octubre de 2007 con un contrato de prestación de servicio”*, sin detallar funciones.

La certificación anterior no relaciona las actividades que realizó la aspirante tal como lo exige el artículo 12 del Decreto Ley 785 de 2005, lo cual imposibilita realizar el análisis de relación que permita determinar si la experiencia adquirida está relacionada con las funciones del empleo a proveer.

Por las razones anteriormente expuestas cabe señalar que no le asiste razón a la aspirante cuando señala que le fueron debidamente validados los dieciocho (18) meses de experiencia relacionada. De otra parte, es importante aclarar que, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 16 del Decreto Ley 760 de 2005, es de competencia de esta Comisión Nacional resolver las solicitudes de exclusión que presenten las Comisiones de Personal, como la que ahora nos ocupa, con el propósito constitucional y legal de garantizar el criterio del mérito y los derechos de igualdad y libre concurrencia de los aspirantes, deber que puede concluir con la exclusión de un elegible de la Lista.

Se concluye, entonces, que la señora **SHIRLEY JOHANA ALVAREZ ANAYA, NO CUMPLE** con el requisito mínimo de Experiencia establecido para el empleo identificado con el código OPEC No. 75420, denominado Técnico Administrativo, Código 367, Grado 12, ofertado en el Proceso de Selección No. 1343 de 2019 – Convocatoria Territorial 2019-II, razón por la cual se considera procedente la exclusión solicitada por la Comisión de Personal de la Gobernación del Atlántico.

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la lista de elegibles a la aspirante Shirley Johana Álvarez Anaya, Proceso de Selección No. 1343 de 2019 – Convocatoria Territorial 2019-II”

El numeral 11 del artículo 14 del Acuerdo No. CNSC- 2073 de 2021, establece que es función de los Despachos de los Comisionados, *“Expedir los actos administrativos (...) para aperturar y decidir sobre las exclusiones solicitadas para los integrantes de las Listas de Elegibles de los procesos de selección a su cargo] (...), de conformidad con la normatividad vigente”.*

Por medio de la resolución 2022RES-100.120.24-0363 del 10 de febrero de 2022, se encargó de las funciones del empleo denominado Comisionado Nacional del Servicio Civil, a la servidora pública DIANA CAROLINA FIGUEROA MERIÑO, durante los días 10 y 11 de febrero de 2022.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Excluir a **SHIRLEY JOHANA ALVAREZ ANAYA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1001778224, de la Lista de Elegibles conformada y adoptada mediante Resolución No. 2021RES-400.300.24-8771 del 11 de noviembre de 2021, para proveer una (1) vacante del empleo, identificado con el Código OPEC No. 75420, denominado Técnico Administrativo, Código 367, Grado 12, ofertado en el Proceso de Selección No. 1343 de 2019 – Convocatoria Territorial 2019-II, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar la presente Resolución a **SHIRLEY JOHANA ALVAREZ ANAYA**, al correo electrónico shirley.alvarez.anaya@hotmail.com, y a través del aplicativo SIMO, teniendo en cuenta que existe autorización expresa para la utilización de este medio de notificación, en los términos de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 4 del Decreto 491 de 2020 y el artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005.

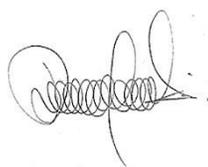
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar la presente Resolución al Representante Legal y al presidente de la Comisión de Personal de la Gobernación del Atlántico (Atlántico), a los correos electrónicos cmguevara@atlantico.gov.co y jatuesta@atlantico.gov.co, de conformidad con el artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005 y el artículo 4 del Decreto 491 de 2020.

ARTÍCULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual deberá ser interpuesto ante la CNSC, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la misma, mediante el aplicativo SIMO de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 11 de febrero del 2022



DIANA CAROLINA FIGUEROA MERIÑO
ASESORA ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE COMISIONADO NACIONAL DEL SERVICIO
CIVIL

Aprobó: Ruth Melissa Mattos Rodríguez – Asesora Convocatoria Territorial 2019-II
Revisó: Luis Gabriel Rodríguez de La Rosa – Profesional Especializado de Despacho
Proyectó: Amparo Cabral Valencia – Profesional Especializado del Despacho